

En Chile, la conversación económica se suele reducir a una pelea de trincheras: o ajustamos el cinturón o expandimos el gasto. Pero el dilema de fondo es más simple –y más duro–: llevamos demasiado tiempo creciendo poco. Con proyecciones para 2026 en torno a 1,5%-2,5% y un crecimiento tendencial a 10 años en el mismo orden, el problema ya no es solo fiscal. Es de ambición. De proyecto. De inversión. Y, sobre todo, de volver a crecer.

La disciplina fiscal ha sido un activo. Nos dio credibilidad y estabilidad en tiempos difíciles. Pero una cosa es cuidar las cuentas y otra es resignarse al bajo crecimiento. Hoy, el costo de la inacción puede ser mayor que el de una flexibilización acotada y bien diseñada: una brecha fiscal temporal, con monto, destino y plazo definidos, destinada a inversión pública de alto impacto y con evaluación ex ante y ex post. No a gasto permanente. A proyectos que muevan productividad: infraestructura logística, habilitación para la transición energética, capital humano, ciencia aplicada y un marco regulatorio que vuelva a poner a la inversión privada en el centro.

Ese es el punto del “multiplicador fiscal”: inversión pública que empuja inversión privada y eleva el crecimiento potencial.

–Por Javier Álvarez–
Ingeniero Civil Químico



Chile invierte en Chile



Puertos más eficientes, carreteras y transporte que reduzcan costos, una política de vivienda que también active empleo formal, digitalización del Estado y de las empresas, y apoyo efectivo a pymes para que pasen de sobrevivir a expandirse. Si se elige bien, el retorno no es solo actividad en el corto plazo; es más productividad y, por lo tanto, más recaudación futura. La discusión, entonces, no es déficit sí o no: es en qué se invierte,

con qué estándares de ejecución y cuánto demora en convertirse en obras.

La otra parte de la ecuación es tributaria. No por ideología, sino por incentivos. En la última década, mientras varias economías comparables discutieron y ajustaron sus tasas corporativas a la baja, Chile elevó su carga hasta niveles en torno a 27%, en un mundo donde el promedio global se ubica cerca de 21%. Distintos diagnósticos –incluidos los

asociados a la Comisión Marfán– han advertido que una estructura que castiga la reinversión termina frenando la formación de capital y, con ello, los aumentos sostenidos de salarios. En un país donde la inversión privada ha crecido poco, el margen para seguir encareciendo el ahorro y la reinversión es estrecho. El foco debiera estar en una base más eficiente y en reglas estables.

Los impuestos pueden ser procrecimiento si financian bienes públicos que aumenten productividad: seguridad, infraestructura, servicios que funcionen y un Estado que habilite. Si no, se transforman en un costo adicional que no se compensa con mejores condiciones para producir e invertir. La discusión relevante no es “más” o “menos” Estado, sino uno que haga bien lo esencial y rinda cuentas.

Nada de esto despega, además, si la “permisología” sigue convirtiendo proyectos en maratones interminables. Sin gestión pública, la mejor estrategia se queda en titulares. La señal debiera ser nítida: usar de manera responsable la capacidad de financiamiento del Estado para destrabar inversión, elevar productividad y recuperar crecimiento, con plazos, metas y responsables visibles. Un déficit acotado y temporal puede ser parte de la solución si compra futuro y no clientela. El estancamiento, en cambio, es una decisión. Chile debe invertir en Chile. ●